



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés

17-184

Proceso: **APELA SENTENCIA**

Demandante: **LUÍS ALBERTO RAMÍREZ** representado por su curadora **CARMENCITA DEL SOCORRO OCAMPO CASTAÑEDA**

Demandados: **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.**

Radicado No.: **0500-31-05-003-2011-00664-04**

Decisión: **CONFIRMA CONDENA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

Conforme documentación allegada con el escrito de alegatos se reconoce personería para representar los intereses de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN al abogado HERMES REINEL HOYOS GUTIÉRREZ, identificado con c.c. 1.017.138.582 y tarjeta profesional No. 221.374 del C. S. de la J., según poder general otorgado por JORGE ALERTO JULÍAN LONDOÑO DE LA CUESTA en su calidad de representante legal de la entidad a través de Escritura Publica 1503 del 26 de junio de 2019 de la Notaria 23 del Circulo de Medellín-

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 05** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita el demandante tras declarar que las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P –EPM, en calidad de adquirente y/o propietaria de los bienes y servicios de la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE

ENERGÍA S.A LIQUIDADA- EADE, es culpable del accidente de trabajo que sufrió en el ejercicio de una labor para la que no había sido preparado y por no haberse entregado los elementos idóneos para su ejecución, se condene a la demandada a reconocerle la indemnización total y ordinaria de perjuicios, tanto materiales, como morales y de relación ocasionados con el accidente de trabajo.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS HECHOS:

- ✓ Que ingresó a laborar al servicio de la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A LIQUIDADA- EADE como conductor el 25 de agosto de 1981, donde laboró hasta el 27 de junio de 2007 cuando fue desvinculado, momento para el cual desempeñaba el cargo de AGENTE TÉCNICO DE GESTIÓN MTTO CORPORATIVO con un salario de \$915.462.
- ✓ Que el 17 de febrero de 2005 venía desempeñándose como conductor, momento para el cual fue reasignado al mantenimiento en plantas de subestación de energía bajo el cargo de AGENTE TÉCNICO.
- ✓ El 18 de enero de 2006 sufrió un accidente de trabajo que le produjo quemaduras en la cara, cuello, parpados, labios, cuero cabelludo, miembro superior izquierdo, así mismo quemaduras de córnea y saco conjuntival.
- ✓ Que el día del accidente se encontraba laborando en la subestación de Hispania, dentro del programa de automatización y modernización de esta, realizando labores de limpieza, las que por regla general se realizaban suspendiendo la energía durante todo el día,, sin embargo en esta jornada solo se autorizó la suspensión de tres horas, lo que obligó a efectuar la limpieza aceleradamente, circunscribiéndose solo a las conexiones de los cables monopolares, por ello el ingeniero jefe le ordenó que consiguiera alcohol industrial, dado que este tenía un secado más rápido, entregándole dinero al asistente Técnico Johny Restrepo para adquirir dicho elemento, pues regularmente para la limpieza se utiliza H2D2 que se demora más en secar pero es más seguro.
- ✓ Que el alcohol industrial bajo condiciones ambientales se comporta como un líquido inflamable, es decir, que los vapores que desprende convierten la zona de trabajo en un área clasificada y cuando se trabaja con este líquido en recintos cerrados, se pueden formar nieblas de líquidos inflamables los cuales pueden inflamarse al entrar en contacto con una fuente de ignición, por debajo de su punto de inflamación, que fue lo que ocurrió cuando él estaba limpiando la cabina de la subestación produciéndole las lesiones descritas.
- ✓ Que el accidente de trabajo se dio por culpa de la empresa, pues esta no cumplió con las reglas de oro, ya que en primer lugar, la labor se efectuaba en cabina cerrada y comenzó a efectuarse en “caliente” (con la energía), además no le dio capacitación, pasándolo de conductor a Agente Técnico sin tener preparación para ello, no le dio los implementos de seguridad: traje de

protección. Aunado a lo anterior, se dieron aspectos técnicos deficientes en las instalaciones como: insuficientes distancias de seguridad, deficientes sistemas de puesta a tierra, inadecuada selección de protecciones e insuficiencia en los sistemas de señalización.

- ✓ Que como secuelas de dicho accidente quedó padeciendo de leves alteraciones atencionales, fallas amnésicas moderadas a severas, fallas en la comprensión del lenguaje, severa alteración de la función ejecutiva, diagnóstico de síndrome prefrontal de predominio izquierdo y cicatrices en el dorso de la mano izquierda sin retracciones, por lo que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le determinó una pérdida de capacidad laboral del 60.14% con fecha de estructuración del 29 de mayo de 2008.
- ✓ Que mediante comunicación del 25 de enero de 2010 la ARL le reconoció pensión de invalidez a partir del 29 de noviembre de 2009.
- ✓ Que en asamblea extraordinaria del 25 de julio de 2006, los propietarios de EADE declararon su disolución y liquidación y como consecuencia de ello, el socio mayoritario EPM adquirió la participación de los demás socios en EADE quedando como único dueño de todos los bienes y servicios de esta.
- ✓ Que en razón de la disolución y liquidación de EADE el servicio de energía que esta suministraba siguió siendo prestado por ETA SERVICIOS S.A. E.S.P. sin solución de continuidad, como operador mediante contrato No. 14548 celebrando previamente con aquella para la prestación del servicio de energía, utilizando para ello todas las instalaciones y bienes de EADE, al igual que las cuentas bancarias en las que se cancelaba tanto las facturas de energía como de cualquier otra obligación que tuviera con esta empresa.
- ✓ Que el 25 de junio de 2007, según acta No. 44 inscrita en Cámara de Comercio, se declaró liquidada EADE y EMPM asumió en forma directa el manejo del negocio de suministro de energía que venía siendo operado por ETA SERVICIOS desde el 25 de junio de 2006.
- ✓ Que las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN siempre actuaron como matriz del grupo al cual pertenecía EADE E.S.P. liquidada.
- ✓ Que el 23 de julio de 2009 se presentó la reclamación administrativa.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante auto del 17 de septiembre de 2014 (fl 387) se dio por no contestada la demanda, decisión que fue confirmada por esta Sala de Decisión mediante providencia del 21 de septiembre de 2016 (fl 416).

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el 26 de julio de 2017, tras **DECLARAR** que existió culpa plena del empleador en el accidente de trabajo sufrido por el señor **LUÍS ALBERTO RAMÍREZ** y que **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN** subrogó en la responsabilidad a **EADE** por ser casa matriz y ante la liquidación de **EADE**, **CONDENÓ** a **EPM** a pagar al demandante:

- la suma de **\$190.749.020** por lucro cesante consolidado
- la suma de **\$181.189.438** por lucro cesante futuro
- **\$36.885.850** a título de daños morales equivalente a 50 SMLMV
- **\$36.885.850** a título de daño de vida en relación equivalente a 50 SMLMV
- Las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de **\$14.720.000**.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Conforme el artículo 216 del CST el empleador debe responder con la indemnización total y ordinaria de perjuicios por los daños causados cuando se demuestra la culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, norma que en principio no es aplicable a los trabajadores oficiales, pero que se ha aplicado conforme jurisprudencia de las Altas Cortes atendiendo a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 81 de la Ley 9 de 1979.

Agregó que para que proceda dicha indemnización se debe probar el hecho dañoso, una relación entre el hecho y el daño y los perjuicios y según lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia la culpa que se debe demostrar por parte del empleador es la culpa objetiva, definida como el error de conducta que no habría cometido una persona cuidadosa colocada en las mismas condiciones externas del autor del daño. Indicó que la responsabilidad del empleador es una responsabilidad contractual en la cual es el empleador quien tiene una posición objetiva del deber de cuidado y quien debe demostrar su diligencia en brindarle todos los elementos necesarios para cuidar la salud e integridad del trabajador.

Estimó el a quo que en el caso de autos quedó debidamente establecido que EADE tuvo culpa en el accidente de trabajo sufrido por el señor Luis Alberto Ramírez que le causó una pérdida de capacidad laboral del 60.14%, por lo que tiene derecho a la indemnización plena de perjuicios, por

cuanto dicho empleador no desplegó toda la actividad necesaria para que su trabajador tuviera todos los conocimientos y elementos necesarios para realizar el trabajo de mantenimiento de la subestación eléctrica de Hispania, además no hay justificación para que el actor haya sido trasladado de puesto de trabajo de conductor a operario de mantenimiento, lo cual era una actividad laboral peligrosa, pues implicaba la manipulación y mantenimiento de equipos eléctricos de alta tensión, sin que hubiera recibido la capacitación académica ni práctica, pues así lo indicaron los testigos. Aunado a lo anterior, señaló el a quo que quedó establecido que al momento del accidente el actor no contaba con las herramientas de protección, es decir, gafas, uniforme de seguridad y/o equipo de seguridad, a pesar de que el traje de arco eléctrico era totalmente indispensable para el trabajo en “caliente” es decir, con los equipos objeto de mantenimiento estando encendidos.

De otro lado consideró que si bien en principio en llamado a responder por el accidente de trabajo del demandante sería su empleador EADE, empresa que ya se encuentra liquidada, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN debía subrogar a EADE en las consecuencias derivadas del mismo, toda vez que conforme al certificado de existencia y representación legal de EADE (fl 245), expresamente se certifica que existe grupo empresarial teniendo como empresa matriz a EPM y además por cuanto los testigos fueron unánimes en decir que EPM continuó usando todos los equipos, instalaciones que antes usaba EADE, por lo que concluyó que se daba una unidad de empresa entre ambas entidades, EMP como matriz y EADE como subordinada o filial, por lo que CONDENÓ a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN como matriz de EADE a asumir las consecuencias de la culpa patronal por el accidente de trabajo sufrido por el demandante.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Señaló que no debió declararse la sustitución patronal entre EADE y EPM, pues entre los requisitos para que surja la vida jurídica está conforme lo estable el artículo 53 del decreto 2127 de 1945, es la continuidad de la prestación de servicio personal del trabajador entre la empresa sustituida y la empresa sustituyente, sin que haya existido solución de continuidad entre la relación laboral. Y en el presente caso se observa que EADE fue liquidado el 25 de junio de 2007, conforme acta 44 original de accionistas y certificado la Cámara de Comercio de Medellín, circunstancia que conllevó a la terminación del contrato laboral del demandante a partir de la misma fecha con el pago de la correspondiente indemnización y prestaciones sociales.

Agregó que EPM no es la adquirente de los bienes y obligaciones de la extinta EADE, valga decir que entre la mencionada sociedad liquidada no se efectuó ninguna negociación, modificación o mutación del objeto social, advirtiéndose que si bien es cierto que EPM viene prestando servicio

domiciliario de energía en las diferentes regiones de Antioquia, lo efectúa con sus propios recursos, independientemente de la situación jurídica que se presentó con EADE, la cual se liquidó por decisión de sus accionistas el 25 de junio del año 2007, además EPM no es la responsable de los hechos y situaciones jurídicas que se presentaron entre dicha sociedad líquida y sus trabajadores.

De otro lado señaló que debe tenerse en cuenta que el demandante confesó, a través de su abogado, que nunca fue trabajador de EPM, cuando en los hechos de la demanda manifestó que su vinculación fue con EADE, aunado al hecho de que el presunto derecho que reclama se originó el 18 de enero del año 2006, cuando EADE, empleador del demandante tenía vida jurídica y al momento de la evaluación de la capacidad laboral enero de 2010 la entidad ya se encontraba liquidada.

En el mismo sentido indicó ha habido pronunciamientos de la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, dentro del procesos radicados número 05-001-31-05006-2007-0155 02 y radicado 05-001-35-05-005-2010-00636-01 donde se estableció que entre EPM y EADE no se ha dado sustitución patronal, ni la figura de unidad de empresa declaró el despacho dentro del presente proceso.

De otro lado, manifestó que con las pruebas que obran en el plenario quedó demostrado que el señor Luis Alberto Ramírez el día 18 enero 2006 se encontraba cumpliendo las funciones asignadas a cargo de asistente técnico y que EADE de manera continua y permanentemente le suministró los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades y daba el cumplimiento al manual de funciones y medidas de seguridad, incluyendo las reglas de oro para la manipulación y manejo de equipos que se emplean o sirven en la conducción o distribución de energía, además dotaba a todos los trabajadores responsables de dichas actividades y también le brindaban la capacitación que requerían y de la cual participó el demandante, situación está que permite desvirtuar toda culpa del empleador en los hechos objeto de demanda.

Indicó que el testigo Johnny Alonso Restrepo Restrepo, sí bien manifestó que no observó al señor Luis Alberto participando en dichas capacitaciones, sí dijo que a todos los trabajadores que hacían mantenimiento de redes eléctricas se les daban dichas capacitaciones, igualmente el señor Oscar Alberto Montoya Ramírez también indicó que se brindaban algún tipo de capacitaciones en tipos de manejo de riesgos y de seguridad industrial a todos los trabajadores y empleados de la extinta EADE. Dice el mismo testigo Oscar Alberto Montoya que por regla general todos los procedimientos que realizaba EADE en cuanto al mantenimiento de los equipos eléctricos y la sede de unidad eléctrica de la misma entidad se hacían sin energía, esto es en frío, siendo ratificado por el mismo testigo Johnny Alonso Restrepo quien manifestó que dicha actividad se realizaba con los elementos que efectivamente les suministraba EADE para el desarrollo de la misma, así como también indicó

que para esos trabajos no era necesario el traje de protección especial, el traje de arco, pues el trabajo era sin energía, además adujo que los trabajos que se estaban adelantando era sobre unas unidades que en el momento no comportaban energía y que en la unidad en la cual resultó lesionado el accionante se encontraba con energía, pero que a su vez tenía la tapa y los elementos de seguridad que le indicaban que era segura para el procedimiento, según las reglas de oro sobre las cuales habían recibido capacitaciones todos los trabajadores de la cuadrilla de la cual él y el demandante hacían parte.

De otro lado, adujo que no debió tenerse en cuenta la prueba documental a folio 185 y siguientes en dónde se establece el informe presentado por EADE, pues si bien este tiene un logotipo de una firma especializada contratista “Ingeniería Especializada” dicha experticia no es idónea, toda vez que no está suscrito por el representante legal de dicha firma, ni por la persona que lo realizó, lo que deja dudas de la idoneidad del mismo y sobre la especialidad con que se realizó. Agregó que si bien dicho informe fue reconocido por el testigo Óscar Alberto Montoya Ramírez, este no fue quien lo elaboró, por lo cual no puede darle validez al documento sin saber quién fue la persona especializada que realizó la experticia. Por consiguiente, no hay elementos probatorios para establecer la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente del demandante conforme al artículo 216 del CST.

Así mismo indicó que tampoco puede tenerse como prueba de la culpa del accidente por parte del empleador EADE, ni la sentencia emitida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Municipio de Itagüí el cual reposa folios 346 y siguientes, dónde se declaró la interdicción mental del accionante, pues este no tiene el carácter de dictamen médico ni tampoco establece las causas del accidente, ni la comunicación mediante el cual la administradora de riesgos profesionales reconoce la pensión de invalidez conforme al decreto ley 1295 de 1994 con las modificaciones establecido en el artículo 776 del 2002, pues de esta prueba no se desprende que el actuar negligente del empleador ni la responsabilidad de este en el accidente.

Finalmente manifestó que no quedó acreditado que al actor se le hubiera suministrado el alcohol industrial para la realización de sus laborales, ya que el testigo Jhony Restrepo negó que él le hubiera dado dinero para la compra del mismo, además se probó que efectivamente esa actividad se hacía con otros compuestos químicos, por lo que no quedó probado el uso de este elemento o que este haya sido el que produjo el accidente. Además insistió que al actor se le dotó de los elementos de seguridad para realizar su labor y que era su obligación corroborar que efectivamente la unidad estaba aislada, sin que dentro del proceso se hubiera probado que el demandante hubiera ejercido tal laboral, a pesar de que se probó que recibió capacitación para esto.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2.3.1. DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Señaló que debe revocarse la sentencia de primera instancia y en su lugar absolver a EPM de todas las pretensiones en su contra, toda vez que en el caso de autos no existió unidad de empresa entre EPM ni EADE como lo declaró el a quo, sino por el contrario, entre las sociedades lo que existió fue un grupo empresarial con objetivos totalmente diferentes; adicionalmente, EADE S.A. era una persona jurídica independiente, que contaba con autonomía administrativa y financiera y era autónoma en sus decisiones y EPM no tenía incidencia en ellas.

De otro lado indicó que tampoco puede declararse que se dio una sustitución patronal, dado que EADE S.A. fue una persona de derecho público, descentralizada del orden departamental con capital 100% público, que fue disuelta de forma anticipada el 25 de conforme Escritura Pública No. 8654 del 31 de julio de 2006 y mediante reunión del 25 de junio de 2007, la Asamblea General de Accionistas declaró la liquidación de la sociedad conforme se lee en el Acta No. 44 de la misma fecha), disolución que obedeció a la Unificación de Tarifas en Antioquía – Integración de Mercados – Resolución CREG078 de septiembre 06 de 2007. El contrato del demandante terminó el 25 de junio de 2007 cuando se liquidó EADE, por lo que este nunca fue trabajador de EPM, además cuando ocurrió el presunto accidente se encontraba laborando para EADE, por tanto conforme a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, la parte demandante no cumplió con la obligación de probar que se configuraron todos los elementos de la sustitución patronal. Basta recordar que para que opere la sustitución de empleadores, el demandante debía demostrar la concurrencia de tres presupuestos legales para que se configurara, a saber: i) cambio de patrono por cualquier causa, ii) continuidad en la prestación del servicio por parte del trabajador y iii) continuidad en el desarrollo de las labores del establecimiento. Sólo así se entiende que exista continuidad de la relación de trabajo.

Agregó que aunado a lo anterior, en el caso de autos no hubo culpa patronal, pues según lo narrado por el testigo Jhony Alonso Restrepo Restrepo, el señor Luis Alberto no desempeñaba actividades de alto riesgo porque tenía como actividades apoyar en labores de mantenimiento, ayudaba con equipos, alistar materiales, limpiar los equipos en tierra que hacían parte en las subestaciones con trapo, brocha, no implicaba trabajo en altura ni subirse a postes a limpiar cuerdas. Agregó que en la empresa se realizaban capacitaciones para la seguridad y manejo eléctrico. Y el accidente ocurrió cuando estaba limpiando equipos, pero no ejerciendo una actividad de alto riesgo. Por su parte, no es posible tener en cuenta la declaración del señor Oscar Alberto Montoya Ramírez, porque no presenció los hechos. Sin embargo, podemos advertir de su declaración que EADE si brindó capacitación general sobre riesgos eléctrico, reglas de oro y manejo de herramientas. De acuerdo

con las anteriores pruebas, podemos indicar que la extinta EADE si brindó capacitación al demandante y el accidente ocurrió por su descuido quien derramó alcohol dentro de un orificio del gabinete eléctrico e inmediatamente sufrió el accidente, por lo tanto, no existió culpa patronal.

Finalmente señaló que el juez de instancia apreció mal las pruebas porque del estudio de estas se concluye:

- “-El empleador fue diligente y cuidadoso en la adopción de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional, pues siempre cumplió con las normas en la materia.
- El señor Luis Alberto Ramírez si contaba con la experiencia y formación para ejercer la labor encomendada.
- El sitio donde ocurrieron los hechos no presentaba riesgo para el operario.
- La empresa si brindó acompañamiento al trabajador, pues le proporcionó las herramientas de trabajo apropiadas.
- La experiencia del señor Luis Alberto le permitía inferir que la actividad que iba a realizar era una actividad riesgosa.
- De acuerdo con lo anterior, se colige que el infortunio ocurrió por culpa exclusiva de la víctima, al adelantar un trabajo sin atender los protocolos de seguridad y utilizando de manera inadecuada las herramientas de trabajo.
- Quedó al descubierto que la única causa generadora del perjuicio sufrido fue la imprudencia en que incurrió el señor Luis Alberto, quien, dejando de lado sus obligaciones laborales, obró de forma descuidada.”

2.3.2. ALEGATOS DEL DEMANDANTE

Manifestó que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, pues se probó la cual del empleador en el accidente de trabajo que sufrió el señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ el 18 de enero de 2006 cuando se encontraba laborando en Subestación de Hispania, dentro del programa de automatización y modernización de esta, debiendo proceder a su limpieza, ya que por regla general para efectuar esta labor, se suspendía la energía por todo el día, sin embargo, para esa jornada y estación en particular, solo se autorizaron tres horas, lo que obligó a efectuar la limpieza aceleradamente, circunscribiéndose esta solo a las conexiones de los cables monopares; por ello le ordenaron que consiguiera alcohol industrial dado que este conllevaba un secado más rápido. Esta decisión la dio el ingeniero jefe, quien fue el encargado además de dar la orden de entregarles el dinero para adquirir los elementos a utilizar en dicha labor.

Adujo que la norma aplicable estable que cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente del trabajo o en la enfermedad profesional, este está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios y en el caso de autos existió culpa del empleador porque:

“Este expuso a su trabajador irrazonablemente al peligro cuando lo mandó a efectuar la limpieza de una estación de suministro de energía en caliente, es decir sin apagarla, así violó la primera regla de

oro: eliminar la energía por completo para ejecutar cualquier labor en la subestación. Y en este caso específico no se aisló por todo el día como debía hacerse, sino solo por tres horas, y solo para los cables monopolares.

No se le dio instrucción para la ejecución del oficio, no se le capacitó, otra violación a las reglas de oro, pues el actor siempre se desempeñó como conductor, simplemente le dijeron que le ayudara a los técnicos en el mantenimiento de las estaciones.

No se le propiciaron los elementos de seguridad establecidos para ello, veamos:

- Se le ordenó limpiar con alcohol industrial y según son las características de este, era contraindicado para realizar la labor que se le ordenó.
- Para su uso hay indicaciones precisas, que no fueron obligatoriamente las que se siguieron como debería ser.
- Amén de lo anterior para la ejecución de la labor se cerró el espacio.”

Aunado a lo anterior, indicó que además se probó que el demandante siempre se desempeñó como conductor y por disposición del empleador, al suprimir estos cargos, lo trasladaron para que ayudara en las subestaciones, sin darle la más mínima instrucción al respecto, siendo esta una grave omisión de las obligaciones del empleador, como son las de propiciar los elementos de seguridad a sus trabajador para cumplir con sus funciones o labores, amén de la capacitación para su ejecución.

De otro lado señaló que debe tenerse en cuenta que al no responderse la demanda se tiene que tal omisión constituye indicio en contra de la demandada, que se reafirma con todo el cumulo probatorio aportado oportunamente y que lo integran tanto los testimonios que son claros y precisos al establecer la existencia del accidente por culpa imputable a aquella, como la abundante prueba documental oportunamente allegada y decretada como tal, y que no le mereció reparo alguno en la oportunidad establecida para ello; es así como se da por demostrada la culpa y por ello que la accionada está llamada a responder por la indemnización plena y ordinaria como lo dedujo el juez de instancia, debiendo confirmarse íntegramente la sentencia que recurre la parte opositora.

Finalmente indicó que en el presente caso operó la figura de sustitución patronal entre EADE y EPM, como lo tiene establecido el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dado que según las actas Nro. 41 y 44, las Empresas Públicas de Medellín quedaron en posesión de todos los bienes y servicios de EADE Liquidada, continuado con la prestación del servicio de energía que aquella prestaba, por ello atendiendo a las normas comerciales cuando todos los bienes son adquiridos o quedan en posesión de otro ente jurídico o natural, este queda respondiendo por todas las obligaciones que se le deriven a la persona jurídica que adquirió aquellos, estamos entonces ante una sucesión. Amén de lo anterior, EPM opera como matriz del grupo, y EADE S.A. ESP., era una de sus filiales.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De los argumentos esbozados por el Juez de primera instancia en la providencia y lo esgrimido por el recurrente, a juicio de la Sala el análisis se circunscribe en determinar, si el accidente de trabajo padecido por el demandante acaeció por culpa suficientemente comprobada del empleador y si hay lugar a la indemnización plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 del C.S.T.

Dependiendo de ello se analizará si EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN debe responder por la indemnización plena de perjuicios, como obligación patronal que estaba en cabeza de EADE, para lo cual se determinará si entre ambas entidades se dio una unidad de empresa u operó la figura de la sustitución patronal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, concluyó el a quo, que el señor LUÍS ALBERTO RAMÍREZ tiene derecho a la indemnización plena de perjuicios por el accidente sufrido el día 18 de enero de 2006, cuando laboraba al servicio de EADE, dado que existió culpa del empleador en la ocurrencia del mismo, mientras que la demandada insiste en que no se probó la culpa del empleador y que por tanto no es procedente dicha condena.

Frente al tema el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la indemnización plena de perjuicios cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente del trabajo o en la enfermedad profesional.

Si bien esta norma está dirigida a los trabajadores particulares, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que esta norma es asimilable al artículo 12 del literal b) de la Ley 6 de 1945 que establecen una indemnización a cargo del empleador del sector público por la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional. En sentencia SL 1037 de 2019 radicado 61729, dijo la Corte:

Como lo esgrimió la parte apelante, el que hayan hecho alusión al artículo 216 del CST, no es razón suficiente para desestimar las pretensiones indemnizatorias, pues lo relevante era acreditar la culpa, el daño, y el nexo causal, debiendo efectivamente el fallador realizar la adecuación normativa. Sobre el contenido del artículo 216 del CST, y el artículo 12, literal b) de la Ley 6 de 1945, y su similitud en los aspectos que debe demostrarse para derivar la responsabilidad del empleador, esta Corporación en sentencia CSJ-SL del 30 de jul. 2014, rad. 42532, reiterada fallo CSJ SL1525-2017, dijo:

[...] para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el lit. b), art. 12 de la Ley 6ª de 1945 (sector oficial) y en el Art. 216 CST (sector particular), debe encontrarse suficientemente comprobada la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo que su establecimiento amerita, además de la demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo, la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia o efecto

de la negligencia o culpa del empleador en el acatamiento de los deberes que le corresponden de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores (núm. 1º y 2º art. 26 Decreto 2127 de 1945)».

La causalidad, es decir, la relación de causa-efecto que debe existir entre la culpa patronal y el daño, además de ser un elemento sine qua non de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios del empleador, es una pauta de justicia, en la medida que, nadie está obligado a resarcir un daño sino cuando ha dado causa o contribuido a él. De allí que la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, y el caso fortuito y la fuerza mayor (denominados por la doctrina causas ajenas), sean considerados en el derecho común como eximentes de responsabilidad, en tanto que, con su establecimiento, el nexo causal se rompe o quiebra, ante la imposibilidad de imputar el resultado dañino a quien se afirma lo cometió por acción u omisión culposa

Teniendo claro lo anterior, debe indicarse que a diferencia de las prestaciones económicas otorgadas por las Administradoras de Riesgos Profesionales, la indemnización plena de perjuicios entraña un elemento esencial de constitución, que es la demostración de la responsabilidad subjetiva del empleador en la ocurrencia del accidente o enfermedad, carga probatoria que le corresponde asumir al trabajador o a sus causahabientes, pues además de la demostración del daño a la integridad o a la salud del trabajador como consecuencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, se debe probar el incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad que, según lo señalado por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo general le corresponden.

La jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia en numerosas decisiones ha reiterado que la culpa a que se refiere el artículo 216 del C. S. T., y que corresponde al trabajador demostrar, es la culpa leve, es decir, aquella producto de la falta de diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios o la del buen padre de familia, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 1604 del Código Civil.

Lo que significa que para que sea procedente el reconocimiento de la indemnización de perjuicios establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se debe demostrar en primer lugar que se trató de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, que se generó un daño y que exista una culpa del empleador, suficientemente comprobada, por lo que incumbe al trabajador probar de manera contundente los hechos u omisiones invocados en sustento de su pretensión, en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso.

Cabe resaltar que dentro de las obligaciones generales y especiales a cargo del empleador consagradas en los artículos 56 y 57 del C.S.T., se encuentran entre otras las de procurar a sus trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y salud. Obligaciones que también están consagradas para el sector público en los numerales 1 y 2 del artículo 26 del Decreto 2127 de 1945 que reza:

Artículo 26. Son obligaciones especiales a cargo del patrono:

1º Disponer lo necesario para que el trabajador preste sus servicios o ejecute las obras en las condiciones, el tiempo y el lugar convenidos y poner a su disposición, salvo acuerdo en contrario, los instrumentos adecuados y las materias indispensables para la efectividad de su trabajo;

2º Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, cuando sea del caso, de modo que el trabajo se realice en condiciones que garanticen la seguridad y la salud de ellos; y prestarles de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, y sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre servicios médicos y hospitalarios para ciertas empresas, deberá existir en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez trabajadores, lo necesario para la prestación de los auxilios de urgencia, según reglamentación de las autoridades sanitarias;

Y por tanto la prueba del mero incumplimiento en la *‘diligencia o cuidado ordinario o mediano’* que debe desplegar el empleador en la observancia de los deberes de protección y seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el infortunio laboral que da lugar a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. Si el empleador pretende liberarse de dicha responsabilidad, la carga de la prueba se invierte y le corresponde demostrar que actuó con la suficiente diligencia y cuidado y que cumplió con sus deberes de protección y seguridad para con el trabajador, pues como lo indica el artículo 1604 del Código Civil: *“la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”*.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia se ha referido en varias oportunidades como en sentencia del 16 de marzo de 2005 (Radicación 23.489 donde se dijo:

“La sociedad recurrente asume que la parte demandante tenía la carga de la prueba de la culpa y no que ella tuviera que probar que agotó todos los medios de prevención y que tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos. Pero en la culpa por abstención no se sigue forzosamente ese método.

No hay dos pasos, sino uno solo, la prueba de la culpa es el incumplimiento de la obligación, en este caso de índole legal, que le impone al empleador ofrecerle a su trabajador medidas de seguridad. Nada más. Probado el incumplimiento, el empleador, como todo deudor, sólo se libera de responsabilidad si acredita que obró con mediana diligencia en la adopción de las medidas de seguridad.”

Así mismo en la sentencia del 10 de marzo de 2005, radicación 23656 se señaló:

“Ciertamente, una vez se demuestra que la causa eficiente del infortunio fue la falta de revisión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente, como medida de seguridad adoptada al efecto por la empresa, la carga dinámica de la prueba se traslada a ésta, dada su calidad de obligada que no cumple satisfactoriamente con la prestación debida, de conformidad con el artículo 216 del CST en concordancia con las normas que regulan la responsabilidad contractual.”

Dicha posición fue reiterada en las sentencias con radicado 22656 del 30 de junio de 2005, 26126 del 3 de mayo 2006, 31076 del 22 de abril de 2008 y 44.502 de 2013, CSJ SL5619-2016, CSJ SL10194-2017 y CSJ SL12707-2017 entre otras.

Por tanto es claro que cuando el trabajador demuestre que el accidente laboral ocurrió por incumplimiento de su empleador de los deberes de protección, la carga dinámica de la prueba se traslada a éste, dada su calidad de obligado que no cumple satisfactoriamente con la prestación debida, de conformidad con el artículo 216 del CST en concordancia con las normas que regulan la responsabilidad contractual.

En el presente caso, se afirma en los hechos de la demanda que el accidente de trabajo sufrido por el señor LUÍS ALBERTO RAMÍREZ ocurrido el 18 de enero de 2006, sucedió mientras se encontraba laborando en la Subestación de Hispania, dentro del programa de automatización y modernización de la misma, por lo que para proceder a la limpieza de la misma se debía suspender el servicio de energía durante todo el día, pero como ese día solo tenían autorización de suspender el servicio por tres horas, la limpieza debía hacerse de forma acelerada por lo que le ordenaron realizarla con alcohol industrial, que tenía un secado más rápido, que no era con lo que normalmente se hacía, pues este en condiciones cerradas se convierte en un líquido inflamable. Además se aduce que la labor se efectuó en cabina cerrada y comenzó a ejecutarse en “caliente”, es decir, aún con energía, violentándose la primera regla de oro o de seguridad para este tipo de trabajos, por lo que al parecer el alcohol industrial al estar un recinto cerrado y aún con energía, este se inflamó al entrar en contacto con una fuente de ignición produciéndole quemaduras en la cara, cuello, párpados, labios, cuero cabelludo, cornea, saco conjuntival y miembro superior izquierdo que le dejaron múltiples secuelas por las que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 60.14%

Así mismo en el documento visible a folios 11 denominado INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO, se observa que EADE reportó que el señor LUÍS ALBERTO RAMÍREZ sufrió un accidente de trabajo el 18 de enero de 2006, aunque en la descripción del accidente solo se consignó: “ACCIDENTE EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN”

A folio 12 reposa documento impreso e la papelería de EADE con el membrete de la entidad, denominado DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE, donde se indicó:



DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO AL SEÑOR LUIS
ALBERTO RAMIREZ, EL 18 DE ENERO DE 2006.

Con el fin de ultimar detalles para el cambio de cables monopolares de 13.2 KV dentro de l proceso de automatización y modernización de la subestación de Hispania, el señor Luis Alberto Ramirez, se encontraba limpiando con una estopa humedecida de alcohol industrial la parte superior de una cabina cerca a donde se conectan los secundarios de un transformador de corriente, momentos después se produjo una explosión precedida de una llama que alcanzó la humanidad del funcionario provocándole quemaduras en la cara. Ojos, cuello, orejas y brazo mano izquierda.

NOTA: Las quemaduras no obedecen a ningún contacto eléctrico, como puede corroborarse por los dictámenes médicos ni en la cabina se presento ningún daño eléctrico que presumiera un contacto de este tipo. Las causas de la explosión están siendo motivo de investigación, pues al parecer ocurrieron debido a una acumulación de gases y la presensación de una carga estática debido al roce de la limpieza que venía realizando el funcionario.

Si bien este documento carece de fecha o de firma por parte de quien lo suscribió, por lo que no existe certeza de quien lo elaboró, el mismo se presume proviene del empleador por cuanto el está elaborado en papelería de la entidad, sin que hubiera sido tachado de falso y al parecer hace parte del informe de accidente de trabajo presentado a la ARL.

A folio 85 reposa constancia de la ATENCION DE URGENCIAS que recibió el actor en el HOSPITAL SAN JUAN DE HISPANIA donde se dejó consignado: *"Hace aprox 20 minutos sufrió accidente con energía mientras manejaba una celda 13.2 KV (mantenimiento) con liquido conductor de energía, se explotó y la ráfaga de fuego, me prendió en cabeza y mano izq"*. Como se ve este fue el primer relato del accidente que hizo el actor al personal de urgencias que lo atendió, lo que ocurrió inmediatamente después del suceso, donde además se dejó constancia *"sin pérdida de conciencia, ingresa caminando, consiente, orientado"*, por lo que este es la única descripción que se tiene de como ocurrió el accidente por parte del demandante, ya que para cuando se inició el proceso, debido a las secuelas mismo este había perdido algunas de sus facultades de memoria, por lo que fue declarado interdicto.

De otro lado, el señor **JHONY ALONSO RESTREPO RESTREPO, compañero de trabajo del actor**, manifestó que el día del accidente del demandante él estaba en la Subestación de Hispania, pero se encontraba en la parte externa. Que sabe que Luis Alberto estaba con una gente de EPM y una ingeniera de EADE. Indicó que al momento del accidente Luís Alberto estaba realizando actividades de limpieza de unos equipos dentro de una celda y hubo una explosión, que si bien él no presencié el accidente si estaba cerca, por lo que fue quien lo auxilió y llevó al médico. Señaló que la explosión se dio porque hubo un arco eléctrico en la celda, que en subestación había unas celdas en las que estaban trabajando que estaban sin energía y en otras si había energía y una de las energizadas fue la que explotó.

De otro lado el señor OSCAR ALBERTO MONTOYA RAMÍREZ manifestó que conoció al demandante porque laboró en EADE como staff administrativo hasta junio de 2006, teniendo como capacitaciones en seguridad industrial, investigar accidentes de trabajo, llevar las estadísticas de los mismos presupuestar todo lo relacionado con elemento de seguridad, capacitaciones, inspecciones de seguridad.

Señaló que conoció al demandante como conductor y que después pues fue trasladado a realizar funciones de auxiliar de mantenimiento.

Sabe que el señor LUIS ALBERTO sufrió un accidente de trabajo, pero no estuvo presente. Que la versión que le dieron es que estaba haciendo mantenimiento a una subestación y él como ayudante

le pidieron que limpiara una cabina, para lo cual utilizaron un alcohol industrial. Que esa versión se la dio el mismo Alberto cuando lo visitó en el hospital, que él fue el encargado de realizar el informe de accidente de trabajo

Por tanto, si bien no existe claridad en cuanto a la forma exacta como ocurrió el accidente, es decir, no se sabe por qué se produjo la explosión dentro de la celda a la que le estaba haciendo mantenimiento el demandante, si fue por el alcohol industrial con el que se estaba realizando o fue por haber dejado partes de la subestación aun energizadas, la Sala si se encuentra debidamente probado que fue accidente de trabajo y que el trabajador se encontraba realizando la labor que le fue encomendada por su empleador y también se encuentra demostrado que dicho accidente le produjo un daño al actor, dejándole como secuelas trastorno depresivo, síndrome prefrontal de predominio izquierdo, quemaduras tipo AB 10% y alteraciones de agudeza visual que le generaron una Pérdida de Capacidad Laboral del 64.14% según dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez visible a folios 15.

Ahora, respecto de la culpa del empleador en dicho accidente de trabajo arguye la parte actora que el empleador omitió capacitarlo debidamente para el cargo que desempeñaba pues lo pasó de conductor a agente técnico de mantenimiento sin tener la preparación adecuada, que además no le dio los implementos de seguridad adecuados como el traje de protección y finalmente no se respetaron los protocolos de seguridad o reglas de oro para trabajar con energía.

Por consiguiente, ante la certeza de la ocurrencia del accidente de trabajo, la lesión que sufrió el actor y la afirmación de que el empleador incumplió la obligación de capacitar al trabajador frente a la labor a desempeñar y la prevención de posibles accidentes, se invierte la carga de la prueba y es al empleador a quien corresponde demostrar que obró con la suficiente diligencia y cuidado que emplea un buen padre de familia y que tomó todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de los riesgos propios de los trabajos con energía eléctrica, considerada como una actividad altamente riesgosa.

Al respecto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL en sentencia del 16 de marzo de 2010 con radicado 35261, puntualizó:

“De conformidad con los artículos 56 y 57 numero 2, es deber esencial del empleador brindar seguridad a los trabajadores y proveerles los elementos adecuados para protegerlos de accidentes que pongan en riesgo su vida o su integridad. Por eso el empleador para exonerarse de la responsabilidad contractual en caso de infortunio laboral, debe demostrar diligencia para prevenir o evitar su ocurrencia, máxime en actividades de altísimo riesgo para la vida y la integridad del trabajador, donde si bien no puede afirmarse que la culpa del empleador se presuma, sí comprometen un grado superlativo de diligencia y cuidado debiendo tomar las

medidas que correspondan con la alta vulnerabilidad a que queda expuesto el trabajador en esta clase de actividades.”

Y recientemente en la sentencia SL-2592 de 2020, donde se dijo:

*“Ahora bien, el CST, de manera general en los artículos 55 y 56 y, específicamente, en los 57 y 58, contiene las obligaciones mínimas que deben cumplir las partes en el desarrollo de sus contratos de trabajo y las previsiones que tienen que acatar los empleadores para procurar la protección y seguridad para sus trabajadores. Así mismo, el artículo 348 *ibídem*, preceptúa que toda empresa está obligada a «[...] suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores» y a adoptar las medidas de seguridad indispensables, para la protección de la vida y la salud de los trabajadores.*

En ese sentido, es del caso resaltar que el empleador, para evitar la producción de daños en contra del trabajador, debe llevar a cabo una política de seguridad y salud en el trabajo regulada, para el momento del fatal accidente, en la Ley 9ª de 1979 y la Resolución n.º 2400 del mismo año del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el Decreto 614 de 1984, el Acto Administrativo n.º 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, así como el Decreto 1295 de 1994.

Lo anterior, conlleva a que cuando ocurra un accidente de trabajo o se estructure una enfermedad profesional, el empleador tenga que demostrar que de manera oportuna y razonable identificó los riesgos ocupacionales y tomó todas las medidas de prevención pertinentes, sólo así podrá acreditar el cumplimiento de esta obligación y probar la ausencia de culpa suya.

Ahora, en casos como el que se examina, en los que se atribuye una actitud omisiva del empleador, como causante del accidente de trabajo, ha dicho la Sala que corresponde a este «[...] demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores» (CSJ SL7181-2015, CSJ SL 17026-2016, CSJ SL16986-2017 y CSJ SL2617-2018).

Las disposiciones sustantivas laborales de salud y seguridad en el trabajo y de riesgos laborales, han sido unívocas en comprometer al empleador a cuidar y procurar la seguridad y la salud de sus trabajadores, así como a adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, en razón a que como lo dice el artículo 81 de la Ley 9ª de 1979: «[...] la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país, su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario».

Así las cosas, se mantiene en cabeza de los empleadores la ineludible obligación de ejercer labores de vigilancia y control en torno al cumplimiento de las condiciones de seguridad en el trabajo, a través de personal idóneo en la materia y con capacidad de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, que por demás no hace otra cosa que acogerse a los lineamientos establecidos en el Convenio 167 y la Recomendación n.º 175 de la OIT, el primero ratificado el 6 de septiembre de 1994

Esa obligación de seguridad de la persona del trabajador, en virtud de la cual se reviste al empleador y a su delegado de plenas facultades para «cumplir y hacer cumplir las disposiciones», «ordenar las medidas de control necesarias» y «adoptar las [...] necesarias para la prevención y control de los riesgos profesionales», no se extingue con la sola acreditación de que este suministró a su trabajador charlas sobre seguridad, lo dotó de los elementos «mínimos» de seguridad industrial necesarios para el desarrollo de sus funciones como el arnés, lo afilió al sistema de riesgos profesionales y le ordenó la práctica de exámenes médicos para determinar su aptitud física para desplegar el trabajo para el que fue contratado.

En efecto, sus obligaciones van más allá, al punto que se convierte en un imperativo suyo exigir el cumplimiento de las normas de seguridad en el desarrollo de la labor y, de ser el caso, prohibir o suspender la ejecución de los trabajos hasta tanto no se adopten las medidas correctivas, o como lo señala el Convenio 167 de la OIT: «interrumpir las actividades» que comprometan la seguridad de los operarios. Todo lo anterior en el entendido de que en el ámbito laboral debe prevalecer la vida y la seguridad.” (negritas fuera de texto)

En el caso de autos, la parte actora alega que el empleador no cumplió con sus obligaciones de prevención de accidentes pues no lo capacitó para el manejo del riesgo eléctrico al cambiarlo de conductor a agente técnico de mantenimiento sin tener la preparación adecuada, además no le dio los implementos de seguridad adecuados como el traje de protección y finalmente no se respetaron los protocolos de seguridad o reglas de oro para trabajar con energía. Por tanto, era carga del empleador demostrar que cumplió con las obligaciones que le impone la Ley en materia de salud ocupacional y seguridad en el trabajo y que implementó las medidas necesarias para evitar la ocurrencia del accidente de trabajo.

Sin embargo, en el caso de autos, el demandado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN no aportó prueba alguna dado que se dio por no contestada su demanda, teniéndose esto además como indicio en contra y si bien el a quo decretó algunos de los documentos allegados por la demandada como prueba de oficio, estos no logran demostrar cuales fueron las medidas que tomó EADE como empleador del demandante, con el fin de evitar posibles accidentes de trabajo y cuidar la salud e integridad de sus empleados.

A folio 13 del plenario reposa carta del 17 de febrero de 2005 donde EADE le comunica al señor LUÍS ALBERTO RAMÍREZ, conductor de Interventoría y Control calidad, que por razones o necesidades del servicio, a partir del 18 de febrero de 2005 sería implantado en el cargo de Agente Técnico Categoría 3, en el Área de Responsabilidad Mantenimiento Corporativo.

A folio 284 reposa registro de capacitación individual realizada por ARP SURATEP a los empleados de EADE, con duración de 8 horas, la cual tiene firma del actor, y tiene como temas: Trabajo en alturas (trauma cerrado y abierto, fracturas), trabajo con electricidad (reanimación, manejo de quemadura, manejo de vestuario), mordedura de serpiente, picadura de abejas mionas, manejo de camilla y traslado de pacientes, camitas por terrenos irregulares (fracturas y esguinces), cuerpo extraño en ojos y signos vitales. Dicha capacitación se realizó el 18 de diciembre de 2004, es decir, cuando el demandante aún se desempeñaba como conductor y en las escasas 8 horas que duró se abordaron 8 tipos de riesgos diferentes que podía enfrentar cualquier trabajador de EADE, por lo que se observa que fueron temas generales y no comportó una capacitación específica ni completa frente al oficio que desempeñaba al actor al momento del accidente, que pudieran evitar o prevenir la ocurrencia de un accidente de trabajo, aún más cuando se trata de un oficio definido como de alto riesgo, que requiere de unos conocimientos específicos y una mayor preparación frente a los elementos que se manejar.

Incluso en la resolución 001348 de 2009, por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico, en su artículo 1º dispone:

Artículo 1º. *De las obligaciones en salud ocupacional.* Las empresas, entidades y personas que laboren en el sector eléctrico, cualquiera que sea su vinculación, deben desarrollar la planeación, ejecución, control y seguimiento necesarios para dar cumplimiento al presente reglamento y a la legislación en salud ocupacional sobre la materia.

Los directivos o administración de la empresa facilitará los mecanismos y proporcionarán los recursos que permitan implementar la gestión en prevención y protección de todas las personas que participan en el desarrollo de sus procesos con el objetivo de mantener y mejorar la salud física, mental y social, así como las condiciones apropiadas de salubridad y seguridad en los puestos de trabajo, tareas y actividades en el sector eléctrico.

En los panoramas de factores de riesgos o peligros o matrices de riesgos o peligros, deben identificarse los riesgos que generen enfermedades profesionales, o puedan ocasionar accidente de trabajo desarrollando los respectivos programas de vigilancia epidemiológica o de mitigación de accidentes.

Las empresas deben diseñar, implementar y normalizar los procedimientos para la ejecución segura de los trabajos con riesgo eléctrico, revisando periódicamente la realización de actividades, dando prioridad a las actividades definidas en el panorama o matrices de factores de riesgos peligrosos.

Todas las empresas, dentro de su cronograma de actividades, incluirán un programa de entrenamiento y capacitación en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, para todos los trabajadores, con el fin de darles a conocer los factores de riesgo a los que estarán expuestos en cada una de sus actividades y los métodos de control.

Parágrafo. La capacitación, asesoría, consultoría, asistencia, exámenes y, en general, lo referente a salud ocupacional y riesgos profesionales que contrate o se le proporcione a una o varias empresas del sector eléctrico, sólo podrá ser contratado, otorgado y dado por personal con licencia en salud ocupacional vigente conforme a la Resolución 2318 de 1996 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para lo cual la empresa debe verificar este hecho, siendo sancionada en caso de no contratar o ser asistida por personal sin la licencia vigente en salud ocupacional.

Como se ve en dicha resolución se contempló como obligación para las empresas y entidades del sector eléctrico la de brindar una capacitación especializada a sus trabajadores, si bien es una norma posterior al siniestro y por tanto no podría exigírsele a EADE que la capacitación se hiciera conforme los lineamientos de la misma, en dicha resolución se evidencia la importancia que tiene la capacitación previa a la ejecución de las actividades que impliquen riesgo eléctrico, precisamente por su grado de peligrosidad.

Aunado a lo anterior los testigos JOHNY RESTREPO y OSCAR ALBERTO MONTOYA, si bien señalaron que al personal de mantenimiento se le brindaba capacitación en temas de seguridad y riesgo electrónico, no supieron indicar si en el caso concreto del señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ se dio esta capacitación, pues a ninguno de los dos le constaba.

El señor JOHNY RESTREPO señaló que forma general que todos los empleados de la cuadrilla recibían constantemente capacitación en el tema de seguridad y riesgo eléctrico. Sin embargo previamente había informado que el demandante siempre se desempeñó como conductor y luego lo pasaron a trabajar en el área de mantenimiento de subestaciones, apoyando las labores de mantenimiento, indicando que no sabe si en ese momento a Luis Alberto le dieron capacitación, pues él no vio que lo hubieran capacitado.

Por su parte OSCAR ALBERTO MONTOYA adujo que cuando el señor Luis Alberto Ramírez pasó de ser conductor a ser auxiliar de limpieza, no recuerda que se le haya hecho un entrenamiento, ni que él tuviera algún tipo de capacitación o estudio en electricidad o electrónica, que él solo pasó de conductor a ayudante de mantenimiento de un momento a otro, ante la supresión de la planta de personal del cargo de conductor, sin que le hubieran dado un entrenamiento muy específico, se les dio unas normas muy básicas pero un entrenamiento así grande no.. Indicó que no sabe si don Alberto estaba capacitado para poner los puntos a tierra, para saber si había energía en parte de la cabina y que desde su punto de vista LUIS ALBERTO no era la persona más preparada del equipo, pues no tenía el enteramiento, él era ayudante, por lo que debió haber ido más despacio.

De otro lado EPM alega que le entregó al actor los elementos de protección adecuados para hacer su labor, sin embargo dentro del plenario solo obra a folios 295/296 constancia de entrega de uniformes en junio de 2006 y diciembre de 2006, es decir con posterioridad al accidente y allí solo se refleja la entrega de una camisa, pantalón y zapatos.

Ahora, el testigo JOHNY RESTREPO indicó que al momento del accidente el señor LUIS ALBERTO solo tenía puesto unos guantes y el uniforme, pero no otro traje especial, aunque también manifestó que EADE les entregaba en equipos de protección sensores de tensión, las pértigas, las puestas en tierra, guantes de cuero, gafas transparentes. Adujo que para la limpieza. Y para para realizar la limpieza tenían estopa, limpiador de dieléctrico para limpiar motores, aislamientos y equipos eléctricos y en ocasiones se usaba alcohol industrial.

Aseguró que la regla de oro para desempeñar ese trabajo eran una especie de protocolos de seguridad, que eran planeación, corte visible, condenación y bloqueo, prueba de ausencia de tensión y puestas a tierra. Las dos últimos consistían en que por medio de un equipo se probaba cuando había ausencia de energía mediante una pértiga aislada y la última se hace luego de la primera poner a tierra en caso de que haya una energización de ese punto y lo tenga la persona. Señaló que no se puede tocar un equipo estando energizado, la orden es que no se haga, sin embargo, indicó que la celda donde ocurrió el accidente del demandante si estaba energizada.

Por su parte el señor OSCAR MONTROYA manifestó que siempre que se realizara una limpieza los equipos deben estar sin energía, pues para trabajar en caliente, con energía, se requerían unos trajes especiales, trajes de arco o keylar, pero que en EADE no se manejaban porque la regla era trabajar en frío.

A folios 186/195 reposa documento denominado INSPECCION DE SEGURIDAD ELECTRICA, INVESTIGACION DE ACCIDENTE ELECTRICO SUBESTACION HISPANIA LUÍS ALBERTO RAMÍREZ, realizado en febrero de 2006, el cual fue emitido por EADE, pero también tiene los sellos de IEB INGENIERIA ESPECIALIZADA, CIDET “Servicios de asesoría, consultoría, estudios y supervisión de montaje y construcción en las áreas de ingeniería eléctrica y civil” y SURATEP.



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE ELÉCTRICO
SUBESTACIÓN HISPANIA

DOCUMENTO IEB-069-04-17

Revisión 0



Itagüí, febrero de 2006

En el referido informe se hace un resumen de los riesgos que implica el manejo de electricidad, una descripción de los hechos que rodearon el accidente , analizando las posibles causas llegando a las siguientes:

5 CONCLUSIONES

- La explosión ocurrida se debió originar más probablemente al presentarse una chispa en una atmósfera explosiva creada por la presencia de vapores inflamables con una concentración de vapor de combustible-aire del orden del 14 %, la cual se encuentra dentro del rango de inflamabilidad del Alcohol Industrial. Esa chispa pudo originarse por pequeños y generalmente imperceptibles efluvios corona al estar las barras de 13.2 kV energizadas.
- No se tomaron todas las medidas de seguridad, ni se utilizaron los implementos de seguridad requeridos por el sitio en el cual se iban a ejecutar los trabajos, dado que se dejó de considerar que el gabinete tenía partes energizadas a 13,2 kV.

Así mismo, el testigo OSCAR ALBERTO MONTOYA RAMÍREZ, quien se desempeñaba en el área de salud ocupacional de EADE, manifestó que el referido informe fue realizado por una firma especializada, Ingeniería especializada S.A, que se contrataba cuando ocurrían este tipo de accidentes eléctricos e incluso esa firma era encargada de darles asesorías. Manifestó que ese informe se realizó por petición de su jefe inmediato llamado JUAN CARLOS MUNERA, que a pesar de que el informe lo realiza una firma contratista, se trata de un informe emitido por EADE y fue discutido con el jefe de subestaciones. Señaló que lo que se concluyó después de realizar la investigación del accidente, apoyado por la empresa INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A., es que al estar manipulando con el alcohol industrial a cercanías a unas barras que están energizadas a 13.200 voltios, la electricidad no tuvo que tener contacto, sino que hay unas cercanías de seguridad y al caer una gota se produjo un arco eléctrico.

Indicó que esa investigación se realiza con el fin de hallar las causas del accidente y tomar correctivos, que en la empresa estaba la regla de trabajar en frío, es decir sin energía cuando se realizaba mantenimiento, pero que no sabe porque no sacaron la energía de la cabina, que se concluyó que para trabajar en caliente (con energía) se tiene que respetar unas distancias de seguridad y el personal tiene que usar un traje de arco, con una careta especial para que no se produzcan estos accidentes.

Manifestó que en el caso de la subestación Hispania la persona que estuviera al mando era quien debía dictaminar o dar instrucciones de apagar o no equipos para realizar limpieza, que si bien no recuerda quien estaba al mando de la subestación para la época, si precisó que para hacer el mantenimiento debía estar un ingeniero y el último eslabón era Alberto y era el menos preparado. Señaló que en EADE siempre trabajaba con las reglas de oro, apertura, corte visible, verificar ausencia de tensión, que es con un aparatico que se verifica si la apertura quedó bien hecha, lo otro es instalar las puestas a tierra, pero EADE tiene la filosofía de trabajar en frío, pues para trabajar en caliente se necesita unos trajes especiales

Conforme a lo anterior, concluye la Sala que el empleador del demandante no probó que hubiera cumplido con sus obligaciones de protección y cuidado frente al demandante y por el contrario la prueba apunta a que al señor LUIS ALBERTO RAMÍREZ se le cambió su oficio de conductor a agente técnico, labor que implicaba el mantenimiento de equipos y plantas de subestaciones de energía, labor para la cual no estaba entrenado, pues no contaba con ningún tipo de experiencia ni capacitación, sin brindarle una capacitación completa y adecuada frente a la realización segura de la misma, así como también quedó probado que en el accidente de trabajo del actor se incumplieron protocolos de seguridad al no quitar en forma completa la energía de toda la subestación, ya que no

se contaban con los trajes de seguridad o trajes de arco para poder trabajar con energía y además utilizar para la limpieza un líquido altamente inflamable como el alcohol industrial, según lo concluyó la firma contratada por EADE para la investigación del accidente de trabajo.

Así lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1037 de 2019 radicado 61729, donde en un caso similar indicó:

Por tanto, como lo endilga el recurrente en el presente evento bajo el concepto de culpa leve, por tratarse de un contrato conmutativo (CSJ SL261-2019), se exigía al empleador *«aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios»*, que en el caso concreto, bajo el vínculo contractual existente, consistía en el cumplimiento de las obligaciones del empleador en relación con la vida, salud y seguridad de su trabajador, como se puede derivar, de lo señalado en los numerales 1 y 2 del art. 26 del Decreto 2127 de 1945 vigente entonces:

Son obligaciones especiales a cargo del patrono:

1o. Disponer lo necesario para que el trabajador preste sus servicios o ejecute las obras en las condiciones, el tiempo y el lugar convenidos y poner a su disposición, salvo acuerdo en contrario, los instrumentos adecuados y las materias indispensables para la efectividad de su trabajo;

2o. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, cuando sea del caso, de modo que el trabajo se realice en condiciones que garanticen la seguridad y la salud de ellos; y prestarles de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, y sin perjuicio de las disposiciones especiales sobre servicios médicos y hospitalarios para ciertas empresas, deberá existir en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez trabajadores, lo necesario para la prestación de los auxilios de urgencia, según reglamentación de las autoridades sanitarias;

Así mismo, en el artículo 21 del Decreto 1295 de 1994, que contempla la obligación de los empleadores de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo.

Bajo el anterior marco conceptual y normativo, como lo endilga la censura, el fallador de segundo grado no tuvo en cuenta que efectivamente el empleador en su conducta omisiva incurrió en la culpa leve que describe el artículo 63 del Código Civil, **pues el contratar a su trabajador para actividades de aseo, y luego enviarlo sin capacitación alguna y sin elementos de protección a vigilar una de sus propiedades, dista mucho de la «diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios»**, y por el contrario, constituye un proceder desinteresado por la suerte de su trabajador, y solo se fijó en proteger el interés empresarial relacionado con el cuidado de sus bienes inmuebles, dando preponderancia a éstos, descuidando lo más valioso dentro de una organización empresarial, como lo es el talento humano.” (negrillas fuera de texto)

Finalmente con relación a la afirmación del apoderado de EPM de que el accidente ocurrió por la imprudencia del demandante, quien también debió verificar que la estación estuviera completamente sin energía, valga aclarar que como lo indicó el testigo OSCAR MONTOYA, esa labor no le competía a él sino al jefe de la subestación o al ingeniero de la cuadrilla, pues el señor LUIS ALBERTO era el menos capacitado para esta labor, aunado a lo anterior y en gracia de discusión este hecho no exonera al empleador de su culpa en el accidente, pues como quedó demostrado, este incumplió con los deberes de protección frente a su trabajador. Al respecto se pronunció recientemente la

Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de junio de 2017 con radicación 40457, con ponencia de la magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, donde se dijo:

“Todo ello pone en evidencia la conducta pasiva y negligente del empleador que no se desvirtuó en el curso del proceso, en cuanto en su defensa se limitó a invocar la culpa del trabajador que, de existir, no lo exime de responsabilidad tal como lo ha dicho esta Sala de la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades, entre otras, en la sentencia CSJ SL5463-2015, en la que adocrinó que la «responsabilidad de la empresa en el accidente laboral no desaparece en el evento de que este ocurra también por la concurrencia de un comportamiento descuidado o imprudente del trabajador, toda vez que, conforme al tenor del artículo 216 del CST, en la indemnización plena de perjuicios a consecuencia de un siniestro profesional con culpa del empleador no se admite la compensación de culpas».

Esta línea de pensamiento ha sido consistente y pacífica en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal y como en los últimos años se ha reiterado en las sentencias CSJ SL160102-2014, CSJ SL17216-2014, CSJ SL5463-2015, CSJ SL 7056-2016, CSJ SL 2644-2016, CSJ SL 9396-2016, entre otras.

En consecuencia, concluye la Sala que en el caso de autos al encontrarse plenamente probada la ocurrencia del accidente, el daño que sufrió el actor, y que el empleador omitió su deber de diligencia y cuidado al no implementar las medidas de seguridad, ni brindarle la capacitación necesaria para la realización de la labor de ayudante en el mantenimiento de subestaciones de energía de una forma segura, se está ante los supuestos de la responsabilidad patronal contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, hecho que le impone a aquel el pago de la indemnización ordinaria y plena de perjuicios, como acertadamente lo consideró la a quo y por lo tanto se CONFIRMARÁ la decisión apelada en este punto..

De otro lado, el juez de primera instancia señaló que entre EADE y EPM existía unidad de empresa, pues tal y como se indica expresamente en el certificado de existencia y representación legal de EADE (fl 245), existe grupo empresarial teniendo como empresa matriz a EPM y como filial o subordinada a EADE, además por cuanto los testigos fueron unánimes en decir que EPM continuó usando todos los equipos, instalaciones que antes usaba EADE, por lo que concluyó que se daba una unidad de empresa entre ambas entidades.

Ahora, dicha interpretación no resulta desproporcionada, pues el artículo 194 del CST dispone:

- “1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
- 2.En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, conexas o complementarias; pero los salarios y prestaciones extralegales que rijan en la principal al momento de declararse la unidad de empresa solamente se aplicarán en las filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando la filial o subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a las de la principal, a

juicio del Ministerio o del juez del trabajo. (...)”

Por tanto en el caso de autos, confluyen dos requisitos para considerarse que hay unidad de empresa, ya que conforme al certificado de existencia y representación de folio 242 del plenario, el grupo empresarial que tiene como matriz a EPM ESP, controlaba a su denominada filial EADE S.A. ESP, puesto que tiene una participación accionaria de más del 50% y ambas entidades tienen como actividad económica principal, la prestación de servicios públicos domiciliarios, específicamente, el de energía eléctrica.

Ahora, conforme lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4293 de 2020 radicado 76915, la figura de unidad de empresa también es aplicable a las entidades de derecho público. En esta oportunidad se dijo:

“Ahora, como también lo previó la disposición previamente citada, dicha declaratoria tiene por objetivo *«lograr el cumplimiento de leyes sociales»*, las cuales no se circunscriben, como lo refirió la réplica, a las relaciones obrero – patronales de carácter particular, sino que se extienden a las relaciones de empleo con el Estado.

Se dice lo último, porque a pesar de que los artículos 3° y 4° del CST, establecen como regla general, que dicho estatuto regula las relaciones de derecho individual de trabajo de carácter particular y *«las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares»*, así como que las primeras, en relación con la administración pública y sus servidores, se reglamentan por *«estatutos especiales»*, conforme lo ha señalado la Corte, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL9681-2017, CSJ SL5685-2018, CSJ SL2878-2019, ello no es óbice para que, como excepción, institutos, principios y garantías de *«las leyes sociales»* les sean aplicables.

(...)

Así las cosas, la anterior remembranza normativa y jurisprudencial permite inferir a la Corte, que es admisible aplicación de la figura jurídica de la unidad de empresa a relaciones laborales con el Estado, ya que, como ocurre, se itera, por ejemplo, con la figura de la prescripción, aquella es un instituto jurídico del derecho del trabajo, concebido para *«lograr el cumplimiento de las leyes sociales»* (ordinal 4° del artículo 194 del CST), las cuales *«regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su status»*, según lo puntualizó la Corte Constitucional en la sentencia CC C-745-1999, se insiste.

Además, porque como lo explicó ese alto Tribunal en la citada sentencia CC C-1185-2000, dicho instituto garantiza principios y prerrogativas constitucionales, atinentes a la igualdad de oportunidad para los trabajadores y la primacía de la realidad social sobre las formalidades, las cuales son extensibles a todas las relaciones laborales dentro de un Estado Social de Derecho.

(...)

Así se dice, pues con la descentralización funcional o por servicios que formalmente se introdujo con la reforma administrativa de 1968, a través de Decretos como 3130 del mismo año, se permitió la creación de entidades que ejercieran una actividad especializada, con autonomía financiera y administrativa, pasando el Estado de ser simple administrador de lo público, a empresario y gran empleador, por lo que empezó a adoptar políticas y a asumir actividades empresariales propias del sector privado, como ocurrió con la EADE S. A. ESP, en cuya existencia participaron capitales de naturaleza pública pero de origen diferente, que posteriormente, como da cuenta el certificado de

existencia y representación de folios 287 a 291, cuaderno n.º 1, proceso principal, rad 2010-636, dieron lugar la consolidación de un grupo empresarial no particular.

Escenario novedoso que no podría la justicia social desconocer, para negar la aplicación de la figura de la unidad de empresa, por la ausencia de una norma en el régimen administrativo laboral, pues con ello se desconocerían para un sector de trabajadores, las garantías que con ella se protegen, en los términos atrás descritos.”

Por tanto, el efecto jurídico de declarar que existió unidad de empresa entre EPM y EADE, es proteger el pago de los derechos del trabajador, por lo que en este caso, al haber dejado de existir la filial EADE por su liquidación, EPM sería la llamada a responder en calidad de matriz por las obligaciones patronales adquiridas por la filial, según lo declaró el a quo.

De otro lado, si bien el juez declaró la unidad de empresa, en la parte motiva también analizó que operó una sustitución patronal entre EPM y EADE, y es frente a tal figura que se esgrimen la mayoría de argumentos de la apelación y los alegatos de la demandada, indicando que no operó la misma porque el demandante nunca laboró para EPM.

Desde el punto de vista normativo, es importante tener en cuenta que en nuestra legislación la sustitución patronal se define como todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento al no sufrir variaciones esenciales en el giro de sus actividades, figura creada con el fin de proteger a los trabajadores de una empresa que cambia de dueño o administración.

Dicha figura está regulada en los artículo 53 y 54 del Decreto 2127 de 1945 aplicable en el caso de los trabajadores oficiales, así:

Artículo 53. La sola sustitución del patrono no interrumpe, modifica ni extingue los contratos de trabajo celebrados por el sustituido. Entiéndese por sustitución toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración, sea por muerte del primitivo dueño o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria, o por contrato de administración delegada, o por otras causas análogas. La sustitución puede ser total o parcial, teniéndose como parcial la que se refiere a una porción del negocio o empresa, susceptible de ser considerada y manejada como unidad económica independiente.

Artículo 54. En caso de sustitución de patronos, el sustituto responderá solidariamente con el sustituido, durante el año siguiente a la fecha en que se consume la sustitución, por todas las obligaciones anteriores, derivadas de los contratos de trabajo o de la ley. De las obligaciones que nazcan de dicha fecha en adelante, responderá únicamente el patrono sustituto.

Es decir, que para que dicho fenómeno se genere es necesario que configuren los siguientes elementos:

- 1- Que se realice un cambio de patrono por cualquier causa.
- 2- Que exista continuidad en el desarrollo de las operaciones del establecimiento.

- 3- Que haya continuidad del trabajador en el servicio, situación que no se presenta si el trabajador acuerda con el antiguo patrón la terminación de su contrato y sigue prestando sus servicios con el nuevo patrono mediante un nuevo contrato.

La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes, el antiguo y el nuevo patrón responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo patrono las satisficiera, puede repetir contra el antiguo. El nuevo patrono responde de las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución. El antiguo y el nuevo patrono pueden acordar modificaciones de sus propias relaciones, pero los acuerdos no afectan los derechos consagrados en favor de los trabajadores.

Aunado a lo anterior conforme acta n.º 41 (fl 199/204) de reunión extraordinaria de accionistas de EADE de julio 25 de 2006, a la cual asistió el gerente general de las Empresas Públicas de Medellín, para dicha fecha esta sociedad contaba con una participación en aquella del 64,0271849343%, en donde se aprobó la Disolución anticipada de EADE con el fin de facilitar la unificación de las tarifas de energía eléctrica en el departamento, además se autorizó la celebración de un contrato de arrendamiento de la infraestructura eléctrica y de los demás bienes para la prestación de servicios a partir del 26 de junio de 2006, con el fin garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.

A través de acta n.º 44 de reunión extraordinaria de accionistas de la EADE (fl 206/241) llevada a cabo el 25 de junio de 2007, se analizó y consideró la aprobación de la cuenta final de la liquidación, rendición de cuentas del liquidador y se distribuyeron los remanentes, dejando constancia que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN para dicha fecha tenía el 99,99999996% de acciones en EADE. Además, se indicó que al decretarse la disolución de la sociedad a fin de garantizar la continuidad de prestación del servicio se había celebrado un contrato de arrendamiento con la empresa ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, ASEO Y ACUEDUCTO S.A. -ETASERVICIOS S.A. el cual comenzó el 1 de agosto de 2006, acordándose en esta reunión terminarlo en dicha fecha (25 de junio de 2007), con ocasión de la terminación del proceso liquidatorio de la EADE S.A. ESP.

El certificado de existencia y representación de EADE (FI 242/245) da cuenta del proceso liquidatorio al que fue sometida la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA culminó el 25 de junio de 2007, en razón de lo cual dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones.

En el caso de autos, no existe controversia que el empleador del demandante fue la Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P., la cual tomó la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo el 25 de junio de 2007 (fl 20).

Según lo narrado por los testigos JOHNY RESTREPO y OSCAR ALBERTO MONTOYA RAMÍREZ, compañeros de trabajo del demandante, después de que comenzó el proceso liquidatorio de EADE, ellos continuaron prestando sus servicios sin que hubiera variación en las funciones ni en las labores ejecutadas, a través de la empresa ETASERVICIOS, que fue con la que EADE había firmado el contrato de arrendamiento para garantizar la continuidad del servicio.

Si bien EPM insiste en que el señor LUÍS ALBERTO RAMÍREZ nunca prestó sus servicios y que por tanto nunca fue su empleador, llama la atención de la Sala que la carta del 25 de junio de 2007 a través de la cual se da por terminado el contrato de trabajo del demandante tiene el membrete en la parte superior de EADE y EPM, además según lo relataron los testigos el personal de EPM siempre estuvo presente, tanto cuando estaban con ETASERVICIOS, e incluso al momento del accidente laboral sufrido por el actor.

Lo anterior da cuenta que se dan los presupuestos para estimar que se dio una verdadera sustitución patronal entre EADE y EPM, pues es claro que EADE entró en liquidación, el actor continuó vinculado a través de ETASERVICIOS, entidad con la que se había firmado el contrato de arrendamiento para garantizar la continuidad del servicio hasta que EPM adquiriera el 99,99999996% de acciones en EADE.

En torno al tema han existido múltiples pronunciamientos por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que han analizado que EMPRESAS PÚBLICAS como matriz de EADE y al tener el control de la mayoría de las acciones, tuvo injerencia en el proceso de liquidación de EADE, con el fin de adquirir posteriormente la totalidad de las acciones de EADE y continuar con la prestación del servicio de energía en el Departamento de Antioquia, dándose una verdadera sustitución patronal frente a los trabajadores que venían con EADE. En sentencia *del 16 marzo 2010, rad. 33719, que reiteró la del 25 abril de 2006, se dijo:*

*“Así las cosas, como se desprende del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín (folio 168), en especial del acta n.º 44, denominada reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas de EADE S.A ESP (acta final de liquidación registrada en el libro 9.º, bajo el n.º 7658, obrante en los folios 406 al 446), que si bien esa empresa dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones, resalta la Sala, con los medios de convicción examinados, **el contrato de arrendamiento celebrado entre EADE S. A. ESP y ETA S. A. ESP, garantizó la continuidad en la prestación del servicio de energía, esto es, el objeto social de la primera se siguió desarrollando a través de un tercero, y hasta cuando se dio la compra de las acciones por parte de las Empresas Públicas de Medellín S. A. ESP, hecho que para la Sala resulta significativo, puesto que deja al descubierto que la verdadera intención de las mencionadas sociedades, no era otra que disfrazar con otra modalidad contractual, lo que realmente sucedía en torno a la relación laboral de los trabajadores de EADE, es decir, la sustitución patronal aludida por el censor.***

En sentencia SL20195-2017 se precisó:

«(...) como se desprende del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín (folio 168), en especial del acta n.º44, denominada reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas de EADE S.A. E.S.P. (acta final de liquidación registrada en el libro 9.º, bajo el n.º7658, obrante en los folios 406 al 446), que si bien esa empresa dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones, resalta la Sala, con los medios de convicción examinados, el contrato de arrendamiento celebrado entre EADE S.A. E.S.P. y ETA S.A. E.S.P., garantizó la continuidad en la prestación del servicio de energía, esto es, el objeto social de la primera se siguió desarrollando a través de un tercero, y hasta cuando se dio la compra de las acciones por parte de las Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P., hecho que para la Sala resulta significativo, puesto que deja al descubierto que la verdadera intención de las mencionadas sociedades, no era otra que disfrazar con otra modalidad contractual, lo que realmente sucedía en torno a la relación laboral de los trabajadores de EADE, es decir, la sustitución patronal aludida por el censor.(...)»

Sentencia SL 4221-2019 Radicado 62553 la Corte consideró:

“En cuanto a la sustitución patronal, debe decirse que ese fenómeno jurídico se presenta, cuando se da el cambio de un empleador por otro, continúa la empresa o existe identidad en el establecimiento y, así mismo, existe una prolongación en los servicios de los trabajadores.

(...)

Conforme a lo anterior, se destaca, que aun cuando a folio 12 del cuaderno principal, reposa carta con la que se dio por terminado el contrato de trabajo, a partir del 25 de julio de 2006, es una situación que no implica, en los términos señalados por el Tribunal, la extinción del vínculo laboral del demandante, porque el contrato celebrado entre EADE S. A. ESP y E.T.A. S. A. ESP, garantizó la continuidad de la prestación del servicio de energía, hasta cuando se dio la compra de acciones por parte de la demandada, circunstancia que revela, tal como se dijo en la sentencia en cita, que la intención de esas sociedades, fue la de disfrazar, con otra modalidad contractual, la sustitución patronal; de allí que sea manifiesto el error del *ad quem*, al haber descartado la existencia de esa figura, máxime, si en la constancia de Cámara de Comercio, se alude al Acta n.º 41 del 25 de julio de 2006.”

Posición reiterada en sentencias SL 3258 de 2020 y SL 3449 de 2022, entre otras.

Conforme a lo anterior se concluye que le asistió razón al a quo de condenar a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN al demandante la indemnización plena de perjuicios con ocasión del accidente de trabajo que este sufrió al servicio de EADE S.A. E.S.P. liquidado, ya que entre ambos se dio una verdadera sustitución patronal, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia también en este punto.

En consecuencia, la sentencia venida en apelación será CONFIRMADA en su integridad.

Costas en esta instancia a cargo EPM por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 en favor del demandante.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

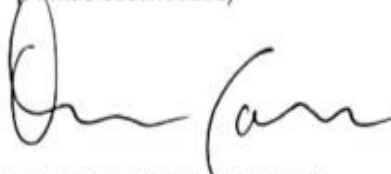
DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 26 de julio de 2017 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido el señor **LUÍS ALBERTO RAMÍREZ con c.c. 70.509.638**, representado por su curadora **CARMENCITA DEL SOCORRO OCAMPO CASTAÑEDA con c.c. 43.051.477**, contra **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.**, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo EPM por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 en favor del demandante

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **LUÍS ALBERTO RAMÍREZ** representado por su curadora **CARMENCITA DEL SOCORRO OCAMPO CASTAÑEDA**
Demandados: **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.**
Radicado No.: **0500-31-05-003-2011-00664-04**
Decisión: **CONFIRMA CONDENA**
Fecha de la sentencia: **21/02/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **22/02/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario